

# La empresa familiar rechaza ante Calviño la subida fiscal del Gobierno

**MENSAJE/** El Instituto de la Empresa Familiar reclama "estabilidad" y "un marco tributario que no nos penalice competitivamente" y advierte de que la subida de impuestos "no va a facilitar la recuperación".

J. Díaz, Madrid

La política económica que defiende el Gobierno de PSOE-Podemos y la que reclaman los empresarios son como el agua y el aceite, una muy difícil mezcla. Pero si hay un punto de especial fricción entre ambos es la fiscalidad. Los empresarios familiares mostraron ayer su rotundo rechazo a las subidas de impuestos que proyecta el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el lunes poco menos que como un deber hacia Europa. Lo hicieron en voz alta y clara y en presencia de la máxima responsable del equipo económico del Gobierno, Nadia Calviño, ante quienes reclamaron "estabilidad y disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente; un marco que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas". Así de tajante se manifestó el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, durante su intervención en la Asamblea Anual de la organización, que clausuró la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, quien encajó con deportividad y aplomo la salva de los empresarios y pidió "remar todos en la misma dirección" porque "desde Europa nos están vigilando".

El IEF, organización de la que forman parte compañías como Acciona, Gestamp, Iberostar, Coca-Cola Europacific Partners o Banca March, además del grupo de perfumería y cosmética Puig, aludió expresamente al propósito del Gobierno de elevar la presión fiscal para converger con la media europea en los próximos años, una idea que Pedro Sánchez defiende desde hace meses y que genera gran inquietud entre las empresas, especialmente en un momento tan "excepcional como éste", en el que la pandemia ha hecho estragos en el tejido productivo, provocando que el 57% de las compañías familiares vieran caer su facturación en 2020 y que el 38% (esto es, prácticamente cuatro de cada diez) tuviera que reducir sus plantillas.

En este contexto, el IEF censuró que España nade a contracorriente del resto de grandes economías europeas.



La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto al presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig (centro), y Fernando Ruiz, presidente de Deloitte (izda.), ayer, momentos antes del comienzo de la Asamblea Anual del IEF.

## ...Y Calviño insta a los empresarios a atajar la precariedad laboral

J.D. Madrid

Aunque pasó de puntillas sobre el tema de la fiscalidad, la vicepresidenta económica aprovechó su intervención en la clausura de la Asamblea Anual del IEF para enviar, a su vez, algunos recados a los empresarios familiares. Entre ellos, la necesidad de abordar un cambio de modelo en el mercado laboral en el que lo prioritario sea la "creación de empleo de calidad, no un modelo basado en la precariedad y contratos tempora-

les, particularmente para jóvenes", instando a la "responsabilidad" de los agentes económicos y a trabajar juntos para que de aquí a final de año España pueda contar con un nuevo marco normativo que ataje la precariedad, el desempleo juvenil o la temporalidad. Precisamente, la alta temporalidad del mercado español es, junto al paro estructural y a la baja productividad, los grandes desequilibrios que, según Nadia Calviño, España debe corregir. Una receta

que las Administraciones Públicas deberían empezar aplicándose a sí mismas, ya que sus tasas de temporalidad alcanzan cotas muy significativas, especialmente en las CCAA, donde rondan el 30% frente al 22% del sector privado. Junto a la promesa de combatir esa dualidad, que el Gobierno quiere escalfar con medidas como la simplificación de los contratos o la penalización de los contratos de muy corta duración (ver información en páginas 28-29), Cal-

viño lanzó otros mensajes, entre ellos que, aunque el Gobierno comenzará este año a reducir los niveles de deuda y déficit, ese ajuste será en realidad una "prioridad a medio plazo", una vez se consolide la recuperación, resumiendo las prioridades del Ejecutivo en 4 puntos: acelerar el proceso de vacunación; seguir protegiendo tanto la estabilidad financiera como el tejido productivo, e implementar el plan de recuperación ligado a los fondos europeos.

Y es que, según la organización empresarial, mientras que países como Francia, Alemania, Italia, Portugal o Grecia dedican un mayor porcentaje de sus recursos a ayudas directas y a salvaguardar el máximo de empresas, al tiempo que reducen la carga fiscal, "nosotros la aumentamos, con la intención de alcanzar el 40% del PIB, lo que significará incrementarla en seis puntos adicionales". Un salto cuantitativo que los empresarios familiares rechazan por-

que solo se logrará elevando la presión impositiva sobre "los que ya pagan muy por encima de sus competidores europeos", lo que, según Puig, "claramente, no va a facilitar la recuperación". En este sentido, el IEF, que también criticó que el Gobierno de coalición convirtiera en prioritarias reformas como el control horario o la ley del teletrabajo "cuando las empresas estaban simplemente intentando funcionar con el trabajo a distancia", fue muy claro en su men-

saje al Ejecutivo: que puedan desarrollar su actividad en "un entorno no hostil, con reglas claras y predecibles, y un marco fiscal que no sea peor que el del resto de Europa".

Y aunque los empresarios reconocieron los esfuerzos realizados por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la pandemia, con una batería de medidas paliativas como los ERTE, los avales de los créditos ICO, el fondo de rescate empresarial de la Sepi o el ingreso mínimo vital, también denun-

cieron sentirse "excluidos" del proceso relacionado con las ayudas europeas. "A menudo percibimos una cierta desconfianza desde las Administraciones Públicas", aseguró Puig, a quien Calviño prometió que la colaboración público-privada será fundamental para implementar el plan de recuperación ligado a los fondos comunitarios y esgrimió que hasta ahora el Gobierno ha venido trabajando en el diseño de los instrumentos que van a regir esa cooperación.